

Estas páginas son continuación y conclusión de un trabajo publicado en el número III, 3, otoño de 1985. Se trataba, como recordará el lector, de dar noticia de tres muy interesantes publicaciones sobre la historia económica de los siglos XIX y XX: dos revistas, *Papeles de Economía Española*, 20, e *Información Comercial Española*, 623, y un libro, compilado por Nicolás Sánchez-Albornoz, titulado *La modernización económica de España*.

Son 50 —y no 45, como se decía por error en la primera parte de este panorama— los trabajos de historia económica que figuran en las tres publicaciones. De ellos, 27 se refieren al siglo XIX y dos a Latinoamérica, comentados todos ellos en la parte ya publicada. Cinco tratan del siglo XX, 14 son estudios regionales y dos hablan de la teoría de la historia económica. Estos 21 trabajos son los que se comentan en esta segunda entrega. Publicados todos ellos en *Papeles* y en *La modernización* (pues los artículos del número indicado de ICE versan exclusivamente sobre el siglo XIX), su relación puede verse al final de estas páginas.

Siglo XX

Aunque comprende ambas centurias, incluyo aquí un breve pero enjundioso trabajo de Jordi Nadal sobre «Un siglo de industrialización en España, 1833-1930», que figura en *La modernización*, donde se dividen esos noventa y siete años en unos primeros cuarenta de revolución burguesa y unos segundos sesenta de reacción burguesa. Aunque cabría discutirla, tal caracterización del período reviste interés, como todo lo que escribe Nadal. Insiste el historiador catalán en explicar el fracaso industrial por la inelasticidad de la demanda, explicación quizá insuficiente, como ya han dicho algunos autores a los que me referí en la primera parte. En algodón, química, vidrio, papel, minería, se advierte la insuficiencia del desarrollo económico español, cuyas clases dirigentes recurren a la protección en lo económico y a la represión en lo político.

José Luis García Delgado, catedrático de Estructura Económica que se ha dedicado con singular fortuna a la historia, tiene publicados, como es sabido, importantes trabajos sobre el primer tercio del siglo xx. En las obras que aquí comentamos figuran dos: «Política económica y defensa de la industria nacional en España, 1898-1922», en *Papeles*, y «Nacionalismo económico e intervención estatal, 1900-1930», en *La modernización*. Sus títulos ya indican las conocidas tesis de García Delgado. La economía española habría cerrado el siglo xix con un desfase creciente respecto de los países europeos más avanzados, con unos problemas que, como el déficit público, la inflación y la baja de la cotización de la peseta, eran manifestaciones de una economía que no lograba ni desarrollarse claramente ni alcanzar un equilibrio en sus principales magnitudes. Frente a la competencia exterior, se eligió una vía nacionalista que arrojó magros resultados. Proteccionismo, intervencionismo y corporativismo fueron las tres líneas maestras de una política económica que no sólo no resolvió el subdesarrollo relativo español, sino que agravó los problemas generales de la sociedad. No hace falta ser, creo yo, un decidido partidario del materialismo histórico para aceptar que el poco brillante balance político de los cincuenta años centrales del siglo xx —todo un triste récord europeo, y casi mundial, de guerra civil y dictadura— sólo puede entenderse conociendo la historia económica del siglo xix y del primer tercio del siglo xx.

Dos etapas se distinguen «con toda nitidez». La primera, hasta 1914, donde se adopta una posición defensiva frente al capitalismo internacional, del que sólo se considera el riesgo que supone para los intereses de una minoría.

El segundo período se caracteriza por el desaprovechamiento de la ocasión que depara en el plano económico la Primera Guerra Mundial. El auge fue pasajero y los problemas sociales se agravaron. Tras estudiar con algún detalle los capítulos fiscal, monetario, de subsistencias, de fomento de la producción nacional y del arancel, concluye nuestro autor que si bien es cierto que hubo desarrollo económico en el primer tercio del siglo xx, al menos en comparación con el xix, en conjunto fue escaso; el progreso no rompió la barrera del subdesarrollo o del semidesarrollo, y España siguió siendo un país pobre, con su riqueza, además, muy desigualmente repartida.

Con palabras de García Delgado, el proteccionismo fue intenso, amplio, ineficaz, oligopolista, contradictorio, voluntarista. En suma, asistemático y poco vertebrado.

En «El programa económico y financiero de Santiago Alba», estudia José García López, en *Papeles*, un intento más, de los mejores tal vez que se hicieron durante el primer tercio del siglo xx, para lograr cambios económicos, todos ellos fracasados o al menos incompletos en sus logros.

Ministro de Hacienda en 1917, Santiago Alba hubo de afrontar el mal

crónico de la Hacienda pública española, y que sólo temporalmente la reforma fiscal de Raimundo Fernández Villaverde había paliado: el déficit de las finanzas estatales y la insuficiencia del ingreso público para atender a las necesidades de un Estado moderno.

Los objetivos de Alba al preparar el presupuesto ordinario para 1917 y el llamado presupuesto decenal de Reconstitución Nacional (1917-1926) eran reconstruir, o más bien impulsar, la economía, nivelar el presupuesto y normalizar la cuenta del Tesoro, acabando con los déficit acumulados. Lo que perseguía Alba era tan plausible y sencillo como difícil. Mediante arreglos a corto plazo en la deuda pública y algunos impuestos nuevos o modificados, se pretendía cebar la bomba para que el aumento del producto nacional permitiera, con igual o parecida presión fiscal, conseguir más ingreso público.

Salvo el gran peso —un tercio del total— de los gastos militares en el presupuesto extraordinario, el proyecto no se merecía la oposición que encontró en las Cortes. Propuesta por un hombre partidario del diálogo y de la transacción, se trataba de una vía prudente y reformista, contra la que se esgrimieron razones formales —descoordinación, imprevisión, falta de globalidad y centralismo— que en el fondo ocultaban la defensa de unos intereses miopes que veían en peligro sus privilegios. Sólo se aprobaron siete medidas y se quedaron en la cuneta las principales, como el presupuesto de Reconstitución, el impuesto sobre beneficios extraordinarios, la creación del Banco Español de Comercio Exterior, el régimen fiscal de la propiedad inmueble y la modificación del monopolio de emisión del Banco de España.

Se perdió así la posibilidad de hacer una reforma desde arriba, y García López, con su buen análisis del frustrado empeño, arroja mucha luz sobre lo que eran la economía y la sociedad en esos años y, en realidad, de lo que fue España hasta hace bien poco.

Francisco Comín y Pablo Martín Aceña, también en *Papeles*, publican un trabajo sobre «La política monetaria y fiscal durante la dictadura y la segunda república». En cuatro epígrafes, estudian los datos económicos del período, la política mixta (monetaria y fiscal juntamente), la política monetaria y la política fiscal.

La política mixta perseguía el equilibrio presupuestario, pero tuvo que ceder ante otros objetivos, como el fomento de la economía, el pleno empleo, la inversión pública y los gastos militares. Santiago Alba y demás no eran keynesianos *avant la lettre*, pero tampoco ortodoxos clásicos a ultranza. Lo que ocurría es que la situación económica general era de «fuertes desequilibrios sociales y sectoriales, con mercados muy alejados del modelo competitivo y con situaciones duraderas de equilibrio con paro de los factores de producción».

En el plano monetario estricto, distinguen los autores cuatro etapas en la

política del tipo de descuento, que es restrictiva (1919-1922 y 1929-1932), pasiva (1922-1928) y tímidamente expansiva (1933-1935).

En política fiscal, se sigue aplicando el lema de «cuanto mayor el saldo positivo del presupuesto, mejor el ministro de Hacienda». La presión fiscal subió dos puntos y medio entre 1923 y 1935 (de 10,2 a 12,6) y el déficit del sector público en porcentaje del PNB pasó, durante la Dictadura, de 2 a 0,6 y, durante la República, de 0,7 a 1,7 (antes de 1922 oscilaba entre 3 y 5). Tal déficit se financia con deuda pública pignorable. La inversión pública fue pequeña y similar en la Dictadura y la República, sin superar el 7,5 por 100 del gasto total. Durante la segunda aumentó el gasto público en desarrollo y redistribución, pero todo a pequeña escala.

Las tesis tradicionales acerca del período que aquí se analiza no son muy convincentes para estos autores. La opinión más extendida es que durante la Dictadura el incremento del gasto público financiado con deuda aumentó el déficit, lo que hizo subir los precios y bajar el valor de la peseta, pero con consecuencias positivas para el crecimiento del PNB. Durante la República, en cambio, la disminución del gasto, para atenuar el déficit heredado, sumado a la política monetaria restrictiva con el incremento del tipo de descuento, impidió una política anticíclica. Habría disminuido la deuda pública, agravándose, sin embargo, la crisis económica y el descontento social. Comín y Martín Aceña creen que en esas interpretaciones se concede excesiva importancia al papel del Estado, cuya actuación no fue ni muy halagüeña ni muy deplorable. Lo más que podía ocurrir a los gobernantes es que la prosecución de objetivos contradictorios, como el incremento del PNB y del empleo, junto con el equilibrio del presupuesto, condujera a situaciones ambivalentes que «podían producir auténticas paranoias económicas». La inversión y el consumo privados eran los elementos importantes, aunque se vieran influidos —nunca decisivamente— por la política económica general.

En este excelente trabajo de disección de un período de tan grandes cambios políticos y tan contadas modificaciones económicas hay que alabar el riguroso análisis cuantitativo, sobre todo en materia fiscal y monetaria (aunque los autores no se pronuncien sobre las grandes diferencias entre los datos del PNB del Consejo de Economía Nacional y Alcaide, diferencias que son a veces de una a dos). Con una sólida base teórica sobre los medios y fines de la política monetaria, el trabajo no pierde, además, de vista en ningún momento la situación general del país, riesgo de los trabajos monográficos. Tal vez lo que se eche de menos sea, si no un análisis contrafactual, sí algún juicio o indicación acerca de si pudo hacerse otra cosa.

Estudios regionales: Andalucía

Antonio M. Bernal escribe sobre «Economía agraria en la Andalucía contemporánea», en *Papeles*, y Pedro Tedde de Lorca lo hace «Sobre los orígenes históricos del subdesarrollo andaluz: algunas hipótesis», en *La modernización*.

Aunque la historia económica de casi todas las regiones españolas sea un relato más bien melancólico de intentos de desarrollo fracasados, Andalucía se lleva probablemente la palma. En el siglo XVIII, por su diversificación productiva, urbanización, comercio y capitales disponibles, ocupaba los primeros puestos económicos; sin embargo, desde la segunda mitad del siglo XIX, la agricultura andaluza no levanta cabeza, pese a contar con condiciones iniciales favorables, y fracasa empeño tras empeño para pasar a una agricultura moderna. El lastre tan grande del sector primario impidió todo desarrollo económico, y su resultado es que Andalucía ocupe hoy en día el penúltimo lugar en la renta *per capita* de las regiones españolas.

La pregunta, pues, resulta obligada: ¿por qué no hubo cambio? Aunque dar una respuesta única y plenamente satisfactoria no sea todavía posible, los dos trabajos que reseñamos suponen una aportación de primer orden a este tema crucial del presente andaluz y de su historia y, por ende, a la teoría del desarrollo económico.

El caso andaluz muestra las contradicciones de la agricultura tradicional. De un lado, es reacia al cambio por su propia naturaleza (por tradición, porque para cambiar ha de dar un salto hacia adelante que las clases dirigentes muchas veces temen, porque no se perciben las ventajas inmediatas del cambio, y porque la función de producción, sin modificaciones grandes, se maximiza de modo relativamente sencillo y conocido, etc.). Sin embargo, de ella ha de partir cualquier revolución industrial, y los resultados que se alcanzan con una agricultura moderna, una vez logrado el cambio, son espectaculares. Tal contradicción se pone muy de manifiesto en Andalucía, con el resultado de que de ambos elementos en lucha salió triunfante el no cambio. Estudiar ese hecho constituye, claro es, un capítulo fundamental de la historia económica de España y, también, aunque sea *sensu contrario*, de la historia del desarrollo.

Bernal, sin pronunciarse claramente por ninguna, recoge las interpretaciones ortodoxas acerca de una agricultura tradicional rentista que no invertía ni en la tierra ni en otras partes (pero ¿qué se hacía a la postre con los capitales excedentes?), o que aduce, más simplemente, que en realidad no existían capitales disponibles. También se refiere a teorías menos convencionales, como la de la dependencia, según la cual el que hubiera otras zonas en España más desarrolladas actuaría de freno para Andalucía, tal como, según al-

gunos, ocurre hoy en día con el Tercer Mundo y los países capitalistas avanzados.

Indica Bernal cómo hasta 1866-68, en que se toca techo y las transformaciones se paran, hay elementos favorables para el cambio en la agricultura, con nuevos productos (cebada, maíz, patata, caña de azúcar, algodón y tabaco) que responden a la mayor demanda derivada del incremento de la población. Sin embargo, la falta de técnicas nuevas, el desaprovechamiento de la crisis agrícola y pecuaria finisecular para avanzar hacia una nueva agricultura, al igual que se hizo en otras partes, y la concentración de la tierra (hecho en sí contradictorio) hicieron que prevalecieran más los aspectos negativos que los positivos.

El resultado fue una explotación extensiva, una producción que no sustentaba o lo hacía malamente a la población, la «permanencia de un arcaísmo rentable» para unos pocos, una clara disfunción entre rentabilidad privada y rentabilidad social, y una serie inacabable de revueltas en el campo. No hubo mecanización, ni mejor rotación de cultivos, ni riego, ni complemento ganadero, ni adecuación a los productos de exportación. De éstos, el vino registró un auge poco duradero, hasta la hecatombe filoxérica, y el aceite, tras un alza de la demanda, acabó desplazado de Europa. Los cultivos alternativos, como la remolacha azucarera, el algodón y el tabaco, quedaron en poca cosa. Todo seguía igual, el 70 por 100 de la población trabajaba en el campo entrado ya el siglo xx, y 700.000 braceros malvivían con 150 peonadas anuales y jornales de unos cuantos reales. El proteccionismo, además de amparar a los propietarios castellanos, permitía en Andalucía una agricultura de secano cerealista y extensiva, que resultaba rentable para algunos.

Desde 1920 se harán intentos, que culminarán en la fallida reforma agraria de 1932, para modificar un estado de cosas que resultaba insostenible. Sin embargo, habrá que llegar a 1960 para que, con el incremento de la industria, el turismo y la emigración, se logre ¡al fin! un principio de vertebración económica... sin reforma agraria.

Pedro Tedde, por su parte, pasa revista a muchas causas —hasta doce he contado— o conjunto de causas que podrían explicar el subdesarrollo andaluz. La emancipación americana afectó, claro está, a Cádiz y a Sevilla, pero las exportaciones a Europa compensaron con creces la pérdida de los mercados de ultramar, adaptándose así la parte, relativamente pequeña, de la economía orientada hacia la exportación a las nuevas condiciones. Más convincente, según Tedde, es el hecho de que la agricultura y la ganadería se dirigiesen al mercado interior y, a diferencia de Cataluña, no buscaran vender sus productos en el exterior. El sector primario estuvo incluso al margen de América en el siglo XVIII y, por lo tanto, no hubo revolución comercial alguna que sirviera de antecedente para una posible revolución industrial. Ya se

ha hablado de la persistencia del latifundio como una explicación muy aceptada, y sin embargo teóricamente discutible, de la falta de cambio en la agricultura. Recuerda este autor que entre 1700 y 1870 la renta de la tierra y su precio se multiplicaron por dos y que los beneficios que reportaban el cereal y el olivar oscilaban entre el 12 y el 20 por 100. Si la existencia de grandes fincas en la Inglaterra del siglo XVIII no fue óbice para que se lograra una revolución agrícola y luego la revolución industrial, ¿por qué en Andalucía sucedió lo contrario?

La presión de la población, sin ser espectacular, fue considerable. Los andaluces crecieron casi un 60 por 100 entre 1797 y 1860 y un 40 por 100 más hasta 1920. Si está claro que no se logró el equilibrio entre recursos y habitantes —pues hubo una enorme emigración—, resulta confuso por qué la existencia de esa demanda potencial y de una mano de obra disponible no incitó a mayores cambios.

Las dificultades económicas generales y las escasas innovaciones en algodón, tabaco, caña y remolacha, sobre todo en Andalucía oriental, son las razones principales que encuentra Tedde para explicar por qué la agricultura mediana y pequeña fue poco boyante. La coincidencia de la crisis finisecular con el proteccionismo no propició los cambios en los rendimientos y contribuyó a que se mantuviera la producción cerealícola, como ya se ha señalado.

El progreso lento de los primeros decenios del siglo XX, con repoblación de vides, organización de la ganadería, en particular la vacuna, mejores abonos, etc., se vio truncado por la guerra civil y la autarquía franquista. La falta de industrialización fue más consecuencia que causa, pues lógicamente no había demanda solvente y así era imposible el despegue fabril.

Insiste Tedde en la desigual distribución de la renta, que perjudica sobre todo a las industrias de consumo, aunque, por otra parte, facilite la acumulación y una eventual inversión. El que esto último no se produjera pudo deberse al aspecto, tal vez clave, de la falta de espíritu empresarial, ya que los Heredia, Larios, Loring, Carbonell eran de origen foráneo. Por último, los enclaves mineros, que, a diferencia de lo que ocurrió con el hierro vizcaíno, no dejaron en Andalucía grandes beneficios ni ocuparon a más del 5 por 100 de la población activa, obligan a preguntarse si no había otra alternativa.

Acaba nuestro autor recordando que el proteccionismo del siglo XX favoreció al norte de España, dejó igual al centro y perjudicó al sur —lo que no coincide, por cierto, con las afirmaciones de Maluquer y Fraile que comentó *infra*—, así como el hecho de que la inexistencia de una banca andaluza obedecía, lógicamente, a la falta de estímulos para la intermediación financiera. Concluye Tedde que los factores están relacionados todos ellos entre sí, pero que si hubiera que destacar alguno sería la falta de capital humano.

Los extremos que se abordan en ambos trabajos son, como puede verse,

muchos y van desde el hecho curioso de que las zonas latifundistas arrojan menos emigración que las de agricultura pequeña, pasando por el estudio que hace Tedde, en un aparte dentro del trabajo de Bernal, de las repercusiones de la filoxera y la evolución de la producción de vino de Jerez, hasta los intentos de síntesis de una historia económica regional que ofrece, sin duda, más dificultades —aunque también tal vez más atractivos— que la de muchas naciones.

Asturias

En «Límites de la primera industrialización en Asturias», publicado en *La modernización*, Rafael Anes explica cómo la economía asturiana, hasta entonces con una agricultura de autoconsumo, comenzó a transformarse hacia 1830 con el aprovechamiento del carbón. Dice este autor, tal vez con una visión demasiado optimista, que tres cuestiones parece que estaban claras en Asturias desde los años finales del siglo XVIII: «que el carbón debía estar en la base del desarrollo industrial asturiano; que la demanda para ese recurso natural había que buscarla fuera de la región, y que para todo ello era preciso contar con los medios de transporte adecuados».

Es cierto que desde los primeros informes (en el de la Dirección General de Minas se han deslizado dos erratas consecutivas, al hablarse de 1929 y 1931 en lugar de 1829 y 1831) se puso de manifiesto la necesidad de unir las cuencas carboníferas del interior con el litoral. Tras el fracaso de los intentos de hacer navegable el Nalón, con 14 millones de reales tirados a la calle —o más bien al río—, la carretera carbonera de Langreo a Gijón abierta en 1838-1842, pese a no reunir condiciones óptimas, como tampoco lo hacía la dársena del puerto, permitió multiplicar por dos los embarques de mineral. En 1856 se construyó el ferrocarril, gracias a la intervención de Fernando Muñoz —el marido morganático de la reina María Cristina—, que tenía intereses mineros. Mayores avatares registraron los empeños para crear una siderurgia asturiana. La ausencia de mineral de hierro adecuado explica los altibajos experimentados desde que en 1848 comenzara la fundición en horno alto en la Fábrica Nacional de Cañones de Trubia (y que continuaron hasta la constitución en 1950 de Ensidesa). Explica Anes cómo fueron acudiendo capitales ingleses y franceses y los fracasos de las fábricas de hierros de Mieres y Lena, al no construirse el ferrocarril que uniese ambas localidades con Avilés. Piénsese que la Sociedad Hullera y Metalúrgica de Asturias, de capital francés, necesitaba cada año para sus materias primas y productos unos 27.000 carros de mulas de 30 quintales. La cuenca de Langreo, gracias a su ferrocarril, vio la creación de la importante Sociedad Metalúrgica Duro y

Compañía, en La Felguera. No obstante esa ventaja, la industria siderúrgica asturiana y la minería del carbón no se desarrollaron más por las tarifas ferroviarias y los fletes marítimos altos, por las dificultades del puerto de Gijón y porque, como es sabido, la construcción de los ferrocarriles españoles se hizo con material extranjero. Además, los cambios tecnológicos, con la reducción del carbón necesario en el procedimiento Bessemer para fabricar acero, hicieron que Asturias perdiera todavía más ventajas relativas. Por ello, tras la anticipación andaluza, en palabras de Nadal, el predominio asturiano duraría sólo de 1860 a 1880, para ser sustituido por la hegemonía vizcaína.

«Los industriales asturianos centran entonces toda su atención en la minería de la hulla y piden la reserva del mercado nacional, al no poder competir con el carbón británico.» El proteccionismo es la solución, una mala solución, claro está. El arancel de 1891 duplicó los derechos que gravaban el carbón importado, y en el último decenio del siglo se duplicó, a su vez, la producción de hulla asturiana. A ello contribuyó también la instalación de talleres metalúrgicos como consecuencia de una división del trabajo entre fabricantes vascos y asturianos. Los primeros producían unos pocos artículos que consumían poco carbón y mucho arrabio, como lingote de hierro, carril, vigas, barras, llantón y palanquilla, mientras los segundos hacían laminados y productos siderúrgicos elaborados.

La economía asturiana a principios de siglo parecía en vías de modernización, avanzándose en casi todos los frentes. No obstante, la Primera Guerra Mundial fomentó artificialmente la producción de hulla, que absorbió energía y capitales, con beneficios, al igual que en otras partes, meramente coyunturales. Acabadas las circunstancias favorables, se insiste en el proteccionismo y se consigue que se imponga a los ferrocarriles el consumo de carbón nacional, en 1928.

Este avance industrializador cojitranco hizo que la población asturiana, repartida con uniformidad hasta mediados del siglo XIX, tendiera a concentrarse desde entonces en la zona central. Los asturianos se fueron a vivir a Langreo, Mieres, Gijón, Avilés, Oviedo y San Martín del Rey Aurelio, o bien se marcharon de Asturias.

La industrialización acarrió una especialización ganadera, con importantes modificaciones en la agricultura. Salvo el maíz, disminuyeron los cereales y, ya en 1924, se obtenía en Asturias la cuarta parte de toda la leche que se producía en España.

El balance final, cabría decir, no es ni desastroso ni brillante. Pese a que los incrementos vegetativos de población no fueron extraordinarios, Asturias no fue capaz de facilitar sustento a todos sus habitantes, y muchos tuvieron que emigrar. El desarrollo no fue equilibrado en ninguno de sus aspectos:

geográfico, poblacional, económico o social. La solución de facilidad que brindó el carbón protegido impidió mayores logros.

Castilla

La «Evolución económica de Castilla y León en las épocas moderna y contemporánea» es la ambiciosa síntesis de Angel García Sanz y Jesús Sanz Fernández que figura en *Papeles*. Con sus 94.000 kilómetros cuadrados, la quinta parte de la superficie de España, y una población que representaba en el censo de 1981 tan sólo el 7 por 100 del total —cuando en 1591 constituía casi la cuarta parte—, Castilla-León es hoy una Comunidad Autónoma cuyo presente y futuro, poco despejados, obligan a que la historia y la economía aporten estudios y, en lo posible, soluciones.

El auge del siglo XVI tuvo su ápice entre 1540 y 1580, cuando la población crecía a más del 0,5 por 100 anual. Alimentar ese mayor número de bocas obligó a extender los cultivos y a reducir los pastos, con el consiguiente descenso de las ovejas mesteñas, cuya evolución cifrada nos dan estos autores desde 1477 hasta 1832. En el siglo XVI, las ciudades castellanas conocieron su siglo de oro: Segovia fue el centro industrial, Medina del Campo el financiero, Burgos el mercantil, Salamanca el intelectual y Valladolid el político-administrativo.

Tras la obligada referencia a las ferias, la disminución de la población, sobre todo de las ciudades, en el siglo XVII redujo la demanda y con ella los cultivos. Los pastos aumentaron y con ellos la ganadería estante, a diferencia de la trashumante, en la que influyó la disminución de la demanda exterior, comprobada por el precio de la lana merina en Segovia.

Aumentaron los costos de oportunidad de la inversión empresarial, la burguesía «se pierde» y crecieron las inversiones en modalidades rentistas. El apoyo generalizado al régimen señorial explicaría, según estos autores, el que la causa principal de la decadencia estribara en una estructura de clase feudal, donde lo que se perseguía era obtener una renta de la tierra, lograr derechos señoriales, comprar jurisdicciones, tener réditos, censos, juros o disfrutar de cargos en la Administración. Esa estructura impidió las inversiones productivas, hizo que el incremento de la demanda se atendiera con cultivos de rendimientos decrecientes, obstó la creación de un excedente al absorberse el ahorro por una presión fiscal enorme y provocó, en suma, que en la segunda mitad del siglo XVII fueran pocas las cosas que recordaran «que tan sólo cien años antes las tierras de Castilla y León habían conocido un período brillante de prosperidad y de desarrollo social».

La recuperación incompleta del siglo XVIII se manifestó en un incremen-

to de población menos pronunciado que en el siglo XVI, con una intervención del Estado —fábricas reales de La Granja, Segovia y Avila y construcción del Canal de Castilla—, la producción de excedentes agrarios para el mercado madrileño y, en definitiva, el agotamiento entre 1780 y 1808 del modelo extensivo de crecimiento por causa de la escasez de tierras que incrementaba los costos y reducía los rendimientos, por las restricciones legales a las roturaciones y por el alza de los precios de los alimentos. El que los precios de la lana subieran menos que los precios de las hierbas y los cereales hizo que la Mesta se hundiera a partir de 1820, y no sólo por las críticas liberales a sus exorbitantes privilegios.

Con la revolución burguesa y la expansión del siglo XIX se intenta una transformación «desde arriba, desde el centro y desde la ciudad». Su correlato político fue la atracción de los campesinos castellanos por posiciones conservadoras, con unas raíces anticapitalistas basadas en los escasos beneficios que reportó la tan incompleta revolución industrial. Aseguran estos autores que la operación desamortizadora rindió los frutos perseguidos —afirmación a la que se podría poner algún pero— y que «el equilibrio intraeuropeo» que había posibilitado la expansión se resquebrajó, con la competencia de los cereales rusos y americanos.

Tras hablar de la utopía de la industrialización castellana basada en el carbón palentino y en la siderurgia vallisoletana, al amparo del ferrocarril de Madrid a Irún, se habla del modelo de desarrollo introvertido del siglo XX, mediante la reacción proteccionista, autárquica y corporativista.

Tras mostrar que la emigración de 1877 a 1920 superó el medio millón de personas, con el casi estancamiento de la población total en ese período, se analiza en un último epígrafe la ambigüedad del desarrollismo de los años sesenta. La emigración de 1950 a 1960 fue de 350.000 personas y la población total descendió en los censos sucesivos, manteniéndose estacionaria en los dos últimos, de 1970 y 1981. La disminución de la población ha hecho aumentar los salarios, la mecanización del campo y la productividad, incrementándose la aportación de Castilla y León al producto agrario español desde el 11 por 100 en 1960 al 15 por 100 en 1975, mientras que la contribución de la industria disminuyó en esas dos fechas del 6,4 al 5 por 100.

El trabajo, pese a la reconocida categoría de sus autores y a las muchas e interesantes sugerencias que hace, me parece un intento brillante pero demasiado ambicioso. A veces bordea el ensayo histórico, aunque se procure, encomiablemente, cuantificar lo más posible. Por mucho que haya avanzado nuestra ciencia, quizá sea prematuro intentar en un trabajo que no llega a las 10.000 palabras explicar lo que ocurrió en la economía y la sociedad de la cuarta parte de España durante medio milenio.

Más modestamente, Nicolás Sánchez-Albornoz nos habla, en *La moderni-*

zación, de «Castilla, el neoarcaísmo agrario, 1830-1930». Los cambios económicos de la España de ese período reforzaron el «agrarismo inveterado» de la región, incluso con retroceso, salvo en Madrid. Con una producción agraria autosuficiente en cereales y legumbres, carne y grasas animales (aunque con poco aceite), vino y algo menos en frutas y hortalizas, Castilla, incluida su artesanía, se bastó a sí misma dentro de un subdesarrollo relativo, al menos hasta 1878. El ferrocarril obligó a un intercambio grande y desigual, desaprovechándose aquí también la crisis agrícola y pecuaria finisecular para introducir cambios en el sector primario. Ya la lana había sido una ocasión perdida al no seleccionarse vientres y sementales, aunque siguiera exportándose lana cruda, y el algodón catalán desplazara a los tejidos de origen animal.

El proteccionismo distorsionó, aquí como por doquier, a la economía, pese a que promovió la integración nacional y la mercantilización. La agricultura registró una expansión horizontal o extensiva, disminuyendo los rendimientos a 6 quintales por hectárea —hoy ascienden en promedio a 16—, pero como todo desarrollo extensivo tuvo su límite. Se produjo así un desequilibrio, con la consiguiente emigración del siglo xx, y una evolución en torno al cambio de cultura que llevó a Castilla-La Mancha a una intensificación parcial de su producción de vinos y aceite, sin que Castilla-León lograra algo parecido.

El neoarcaísmo agrario consiste así en un monocultivo de cereales, pero con protección y sin ventajas comparativas, y una integración en el mercado nacional, pero en una relación asimétrica.

Termina Sánchez-Albornoz con un interesante símil entre la historia castellana y lo que ocurre hoy en día en el Tercer Mundo. Entre las semejanzas figura el subdesarrollo agrario, la falta de capitales y un territorio autosuficiente que acaba abriéndose a la economía mundial. El suelo y el clima llevan a la especialización en unos pocos productos y a ser dependientes en casi todo lo demás.

Las diferencias estribarían en lo temprano del caso castellano, el que se dependa de un centro que radica en el propio país y, como punto tal vez más notable, el que ese subdesarrollo relativo no haya llevado a la subordinación política, sino más bien a una prevalencia, origen de desajustes y conflictos graves.

Cataluña

Jordi Maluquer de Motes escribe dos artículos: «La historia económica de Cataluña», en *Papeles*, y «La revolución industrial en Cataluña», en *La modernización*. Inicia el primero hablando de la necesidad de los estudios regionales en España, algo que no creo nadie discuta. Tras recordar el magno trabajo de Vilar y su aceptación de unas cifras más bajas para la población

catalana en el siglo XVIII de las que inicialmente había avanzado —con lo que la expansión demográfica no fue, «por consiguiente, la causa principal del crecimiento, sino uno de los elementos del mismo»—, recuerda a aquellos autores que, como Garrabou, Sales, Sudrià y Torras, han completado las conclusiones del gran historiador francés sobre el gran incremento de la producción y exportación de vino y aguardiente, «sin duda, el más importante de los cambios que se iniciaron en los últimos decenios del XVII y se acentuaron en el siglo siguiente». El gran ausente, dice Maluquer, de la gran monografía de Vilar es la industria. El sector más dinámico, como es sabido, fue el textil algodonero. Su relación capital-producto baja, su materia prima accesible, la mano de obra poco calificada que necesita inicialmente y los capitales relativamente pequeños explican que cobre impulso con facilidad y se convierta en uno de los motores de la revolución industrial. La polémica acerca de la importancia del mercado americano en ese despegue no está zanjada. Fontana ya terció en la discusión afirmando que ese mercado contribuyó al arranque de la industrialización no tanto por vía directa, consumiendo textiles, como indirectamente, al absorber grandes cantidades de productos vitivinícolas catalanes y colaborando así a la prosperidad agrícola y comercial. Maluquer no cree que el comercio colonial fuera determinante en la industrialización de Cataluña, ni tampoco la emancipación americana un colapso irreparable. Tampoco está claro que la liberación del comercio en 1778 favoreciera el desarrollo industrial catalán, al fomentar la reexportación de textiles extranjeros y estancar de resultas la industria autóctona.

Al comparar Cataluña con Andalucía, encuentra nuestro autor como elemento decisivo una distribución mucho más equitativa de la renta en la primera, que impulsa la demanda de bienes de consumo masivo y bajo precio. «Así, pues, la clave del arranque de la industrialización catalana no reside en el desarrollo de las relaciones de producción capitalistas, probablemente más avanzado en Andalucía, sino, reunidas esta y otras condiciones, en el carácter relativamente igualitario de la sociedad.»

La industrialización del siglo XIX, con su crecimiento de la producción y, en particular, de la productividad, vino a prolongar la expansión del Setecientos, afirma Maluquer, para el que sería difícil identificar un período de despegue o fuerte aceleración del ritmo de crecimiento. El índice de la producción industrial catalana que en una primera aproximación ha elaborado Carreras señala un incremento moderado y regular desde mediados de siglo. Pasa Maluquer con alguna rapidez sobre la gran reducción de las exportaciones textiles catalanas, derivada, entre otras cosas, «del impacto de la revolución industrial británica... La ampliación de las ventas hacia el resto de España desempeñaría en este punto una importante función equilibradora». Pese a la muy importante mecanización del sector, su incapacidad para especializarse

y competir con los textiles europeos, al igual que «la escasa fortuna que alcanzaron las tentativas de consolidar empresas realmente grandes», son dos aspectos esenciales que explican, por un lado, la crisis desde 1880 y el que fallara en suma ese motor en el abortado despegue de la revolución industrial española. Precisamente en el trabajo que comentamos se aduce con razón la falta de estudios sobre la demanda y cómo la crisis agrícola y pecuaria finisecular en España tuvo mayores consecuencias para la producción de bienes de consumo que en Francia, lo que era clara expresión de las diferencias que separaban a la economía española de la de países más avanzados. Con todo, la producción y exportación de vino compensó aquel hecho, permitió acumular recursos y pudo así diversificarse la producción de manufacturas y servicios desde el último decenio del siglo. Critica Maluquer la «virtualidad explicativa» de las cifras de Leandro Prados sobre consumo *per capita* de fibra, al señalar convincentemente que una misma cantidad de ésta permite fabricar en cantidades diferentes tejidos bastos y de escaso valor o bien una cantidad mucho mayor de piezas de hilos finos y elevado valor. Así, «las comparaciones más pertinentes deberían ser las que se realizaran con países de nuestro entorno geográfico y de mayor semejanza en lo que se refiere al volumen y a la distribución de la renta».

En Cataluña faltó otro de los motores del despegue industrial, a saber, la industria pesada. La extrema penuria de materias primas «determinó esa orientación monográfica hacia la industria menos intensiva en energía y, asimismo, los impresionantes esfuerzos para lograr un aprovechamiento integral de la fuerza motriz del agua económicamente utilizable... Ahí reside la explicación fundamental del precario desarrollo de la base industrial catalana». La diversificación ya citada de manufacturas y servicios obedeció a muchos factores: mayor protección, depreciación de la peseta, repatriación de capitales indianos, fuerte crecimiento urbano, cuantiosa inmigración, importancia del mercado interior catalán y, sobre todo, la profunda transformación que se produjo en el sistema energético. Refiriéndose a la investigación, todavía inédita, de Nadal, Carreras, Sudrià y del propio Maluquer, señala éste dos rasgos notables de la industrialización catalana. El primero sería que Cataluña desde mediados del siglo pasado ha importado siempre energía en gran escala, cuyo consumo interior bruto ha tenido un incremento «siempre contenido», y el segundo es la enorme expansión de la producción y consumo de electricidad desde 1910. «La electrificación no se limitó a modificar la estructura del sistema energético ni a seguir la trayectoria de la demanda, puesto que influyó considerablemente en la reorientación del consumo, modificando alguna de sus tendencias profundas.»

En su otro trabajo, publicado en *La modernización*, dice Maluquer que la historia del proceso de industrialización en España obligaría a atender,

«casi en exclusiva, a los casos vasco y catalán», afirmación que parece un tanto exagerada, por tres motivos. Primero, la industrialización, por tardía que sea, de otras regiones también es digna de estudio. Segundo, la economía del País Vasco y, sobre todo, la de Cataluña dependieron mucho de la política económica estatal y del mercado interior general, con lo cual sin saber lo que ocurrió en toda España difícilmente se averiguará lo que aconteció en sus regiones o nacionalidades más avanzadas. Tercero y último, como demuestran precisamente las publicaciones que comentamos, el análisis de todos los casos regionales, probablemente sin excepción, arroja mucha luz sobre los procesos de industrialización, aunque sea estudiando los intentos de desarrollo fracasados.

Este artículo complementa el anterior al suministrar datos que indican claramente, si fuera menester, la industrialización catalana y su avance respecto del conjunto español. Población activa, valor añadido de la agricultura y de la industria y, sobre todo, producción de electricidad por habitante en 1934 muestran que, en esta última fecha, Cataluña y País Vasco-Navarra se hallaban no sólo a muchas cabezas por delante del resto de España, sino que estaban casi a la altura, en lo que concierne a la producción de electricidad, de Bélgica, Alemania y Gran Bretaña, y por delante del norte italiano y de Francia.

Después de hablar de la precocidad de la industrialización catalana, que se hizo sin recursos naturales, pero con una sólida base histórica desde el siglo XVIII (base que, a diferencia de Maluquer, no me parece pretencioso calificar de revolución agraria), hay dos interesantes epígrafes finales sobre la industria de bienes de consumo como opción única y sobre las limitaciones e insuficiencias de la industrialización catalana. En el primero defiende nuestro autor el que Cataluña se volcara hacia el mercado español porque, en la práctica, la segunda opción, «a la suiza», no existía, entre otras razones «porque Cataluña no era, como Suiza, un país independiente y su economía estaba sujeta a condicionamientos que le venían impuestos». Si uno tuviera la fe de algunos en los contrafactuales en la historia, aquí se impondría aconsejar un estudio de esa índole sobre la industrialización de una Cataluña independiente. Porque al no haber tenido los empresarios catalanes las andaderas del proteccionismo y del mercado español, ¿qué hubieran hecho? Es muy cierto, como dice Maluquer, que la trayectoria de toda la industria textil estuvo condicionada por la evolución del sector agrario del conjunto de España, lo que, junto con ventajas, «implicaba unas deficiencias básicas, a la hora de competir en el mercado internacional, insuperables». ¿Cómo se hubieran soslayado, sin embargo, tales deficiencias de no haber existido tal solución de facilidad?

¿A qué se debieron las limitaciones e insuficiencias de la industrialización catalana? La escasa demanda del mercado español, el modelo de especializa-

ción adoptado, la ausencia de una industria siderúrgica moderna y de varias ramas de la química por la falta de hierro y carbón, la consiguiente dependencia energética exterior y, curiosamente, unos costes salariales más altos que en la Europa avanzada, juntamente con una decidida resistencia de unos poderosos sindicatos obreros a reducir el volumen de empleo en el sector textil, y el escaso y tardío desarrollo de la metalurgia de transformación y las construcciones mecánicas, son las principales causas que encuentra Maluquer. En un claro alegato *pro domo*, respetable sin duda, aunque no sé si del todo irreprochable, Maluquer acaba diciendo que la responsabilidad de insuficiencias y deficiencias no debe ser buscada exclusivamente, ni principalmente, en la propia Cataluña, y que la política económica del Gobierno fue la que sofocó a las empresas existentes y sacrificó, por ejemplo, al sector textil catalán en su conjunto. Permítaseme concluir con la afirmación de que los excelentes trabajos de Maluquer —donde brillan con intensidad los logros de la nueva cara de la historia económica— enseñan mucho, constituyen un ejemplo de síntesis rigurosa de una historia compleja, muestran el interés de la cuantificación y de las comparaciones internacionales, presentan las interrelaciones económicas e incluso sociales y... dan una respuesta final acerca del proceso de desarrollo catalán —brillante en el plano español, aunque no tanto en el europeo— que no resulta, a mi juicio, del todo convincente. Tal vez porque la historia económica, pese a todo, no ha avanzado lo suficiente o porque la teoría del desarrollo sea materia hartó compleja, sin atreverme a reputar erróneas las conclusiones de Maluquer sobre las causas últimas de las limitaciones de la industrialización catalana, sí que creo que esas afirmaciones explicativas últimas entran dentro del terreno de lo opinable, sin estar demostradas científicamente.

Galicia

Con parecido título, «La economía de Galicia en los siglos XIX y XX» y «Transformaciones de la economía de Galicia en los siglos XIX y XX. Estado de la cuestión», aparece en *Papeles y La modernización* un mismo trabajo de Jaime García Lombardero.

Galicia es el caso opuesto a Cataluña. ¿Por qué no fue capaz de desarrollarse más cuando, tal como señala este autor, hubo intentos, posibilidades, avances parciales en agricultura, o más bien en ganadería, e industria, con la salazón primero y las conservas después?

Es cierto que inicialmente existía el sistema de foros y subforos y que la desamortización no cambió el dominio útil ni el sistema de explotación, pero a finales del siglo XIX y principios del XX desapareció aquel sistema. No

está claro tampoco por qué la presión de la población sobre los recursos no modificó el modelo de subsistencia. A mi juicio, la evolución de la población gallega en el siglo XVIII no parece corroborar la afirmación de García Lombardero de que hasta 1840, más o menos, estuvo vigente una economía equilibrada con utilización intensiva de trabajo y estancamiento técnico, pues en el Setecientos tuvo que haber también una importante emigración, que demostraría la existencia, ya entonces, de grandes desequilibrios estructurales entre recursos y población. Su cuadro número 1 muestra, además, que en la segunda parte del siglo XVIII el crecimiento fue prácticamente nulo. Como los parámetros demográficos de Galicia durante los siglos XVIII y XIX eran superiores a la media española, el crecimiento real de 0,1 que encuentra Lombardero para 1752-1787 enmascara, obviamente, una situación crítica, ya que el crecimiento vegetativo sería probablemente cuatro o cinco veces mayor.

En Galicia, lo que no parece cumplirse en ningún caso son las tesis bo-serupianas, pues la presión demográfica fue, a lo que parece, un freno constante y no un acicate.

Los cambios que, según Lombardero, se produjeron desde mediados del siglo pasado y que provocaron un desequilibrio estructural en toda la economía gallega no sentaron las bases del desarrollo y dejaron las cosas como estaban, es decir, comparativamente peor que el resto de España. Ni la ganadería de exportación a Inglaterra y Portugal ni la industria de salazón, antecedente de la conservera, propiciaron la acumulación primitiva de capital ni desencadenaron nada semejante a una dinámica de desarrollo industrial.

Tampoco la reforma fiscal de 1845, con la introducción de la contribución sobre cultivos, inmuebles y ganadería, al producir una monetización parcial del campesino gallego, surtió más efectos que los de modificar someramente el policultivo de subsistencia.

No hubo en ningún momento una burguesía que acumulase capital procedente de la tierra y lo invirtiera en industria y comercio. ¿Por qué? Los transportes, factor limitativo, se resolvieron con la construcción del ferrocarril a Coruña, primero, y después a Vigo y Orense. Con todo, los cambios en la agricultura fueron sólo superficiales. La desaparición del barbecho no supuso modificación profunda alguna y fue sólo consecuencia de la presión de la población. Factores positivos como la patata y el maíz, que tan sólo entre 1902 y 1905 duplicaron su superficie cultivada, tampoco entrañaron consecuencias, como tampoco lo hicieron los abonos y la maquinaria.

Incluso existió una industria a domicilio —aunque no fuera un *putting-out system*— que no fue a más. Así, para este autor, el fracaso de la industrialización integrada en Galicia se explica porque la agricultura era un lastre insuperable y porque la industria rural doméstica no fue capaz de dar el salto cualitativo hacia adelante. Sólo hubo modernización en un sector: el de la

industria de transformación y conservación de los productos derivados de la pesca.

La penetración catalana y el cierre del mercado portugués, a fines del siglo XVIII, a la sardina gallega obligaron a introducir nuevas técnicas y formas de comercialización. La primera fábrica de conservas data de 1842, aunque sólo desde 1880 se implantó la industria como tal, que en 1905 contaba con 82 fábricas. ¿Por qué no tuvo ese sector mayor efecto de arrastre sobre toda la economía gallega? Lombardero nos dice que industria conservera y agricultura eran dos mundos aparte. «Tanto la dirección de las limitadas transformaciones agrarias como el localizado proceso de industrialización se proyectaron hacia el exterior y dieron lugar a la formación de áreas propias de mercado, independientes entre sí, sin que se pueda afirmar que generasen un avance en la articulación interna de la economía gallega.»

Madrid

Escapando a la norma casi invariable de las tres publicaciones aquí reseñadas de hablar de la historia económica de los siglos XIX y XX, Concha de Castro escribe en *Papeles* sobre «El comercio de granos y la economía de Madrid en los siglos XVII y XVIII».

El intervencionismo mercantilista propio de la época y la necesidad de alimentar a las poblaciones urbanas explican la importancia de la «policía de abastos». Madrid no era excepción ni en España ni en Europa —su caso se asemejaría, a lo que parece, al de París— y se abastecía de trigo, harina y pan gracias al mercado y al pósito. Desde la Baja Edad Media existía una alhóndiga o mercado público de granos y harinas, y el pósito madrileño data de los Reyes Católicos. Su propósito era regular el mercado urbano y prestar grano a los labradores de la tierra de Madrid. No perseguía fines lucrativos y tenía privilegios como el derecho de tanteo, el de embargar la mitad de las existencias de los arrendadores de rentas en granos a precio de coste y el derecho del *renuevo*. Consistía esto último en que, para que no se echara a perder el trigo de los graneros municipales, se obligaba a los labradores de la jurisdicción a recibir trigo viejo contra la entrega de trigo nuevo de la última cosecha.

El problema de los pósitos, como organismos de regulación, era su adecuación a los altibajos de la producción, muy grandes en la agricultura tradicional. El gran incremento demográfico de Madrid obligó a la expansión del pósito de la capital y a que fracasara su autofinanciación. La previsión de las cosechas «es tardía, con frecuencia optimista o pesimista en exceso, y la estimación de la reserva municipal suele ser errónea. Al anunciarse la escasez, las

existencias son o parecen ser siempre escasas; se ajustan entonces compras apresuradas y costosas, tantas veces resultantes en un superávit que es preciso renovar o malvender después». La administración del pósito, por otra parte, no parece que fuera excesivamente brillante. La importancia económica y política de este organismo fue, sin embargo, grande, tanto que en 1664 su junta rectora «la preside ya el gobernador del Consejo de Castilla».

Con todo, el pósito no bastaba para abastecer a Madrid. Por ello se estableció el llamado *pan de registro*. Desde finales del siglo xvi, los pueblos comprendidos en un radio de 12 leguas en torno a Madrid quedaron obligados a llevar a la capital una cierta cantidad de pan. En el siglo xvii, la zona incluida es de 24 leguas y, para la mayoría de los pueblos, tal institución supuso una pesada carga.

Pobreza y picaresca no fueron ajenas a toda esta política de abastos. Sin embargo, ya en el siglo xvii, cuando Madrid, clara excepción en la España interior, triplicó y cuadruplicó su población, el sector artesanal del pan empezó a modernizarse. Aumentó el número de tahonas, que hacia 1650 no superaban las 50; la harina y el pan eran de mejor calidad, e incluso había unos pocos y refinados consumidores que preferían el «pan francés». A mediados del siglo xviii ya hay 160 tahonas, pero el Ayuntamiento afirma que, a reserva de 20 ó 30, abundan entre sus titulares los «advenedizos de Galicia y Asturias, con pertrechos de poca monta y cuatro mulas cojas». Gente, en suma, de poca sustancia que se endeudaban y compraban trigo al fiado. Por ello, el pósito siguió desempeñando un papel central. Con todo, a mediados del siglo xviii se construye en la Puerta de Alcalá, junto al pósito, una gran alhóndiga, con una enorme panera capaz para 100.000 fanegas. (El consumo madrileño anual se estimaba en un millón de fanegas.) Tal apertura fue acompañada de la agremiación impuesta a los tahoneros y la abolición del *pan de registro*. Pero el pósito seguía ampliando el volumen de sus compras. Sin embargo, el motín de Esquilache de 1766 y las corrientes ilustradas condujeron a la disolución de la Junta de Abastos y a confiar al Ayuntamiento una liberación del aprovisionamiento de la capital, cosa que éste no hace. Campomanes, como fiscal del Consejo de Castilla, criticó duramente el ineficaz sistema intervencionista. Más que pan barato, nos dice Concha de Castro, quería Campomanes evitar estancos y monopolios que impidieran el tráfico libre.

La subida de precios desde 1780 agudizó las dificultades del abastecimiento. La subvención del pan a través del pósito vuelve a recaer sobre los fondos municipales, pero los tahoneros se resistían al *renuevo* y hubo que obligarles por la fuerza. Como se pretendía que el alza no repercutiera sobre el consumidor, la concurrencia de trigos a la alhóndiga fue escasa.

Habrà que esperar a la crisis del Antiguo Régimen para que los abastos públicos de Madrid se abran en 1805 a la libre empresa. Un edicto de agosto

de ese año declara al pan «absolutamente libre... con facultad a todo género de personas y comunidades de Madrid o de afuera, de introducir así pan cocido como trigo y harinas, amasarlo y venderlo a precios convencionales, sin más intervención del Gobierno que en lo perteneciente a la salubridad».

País Valenciano

Jordi Palafox escribe, en *Papeles*, sobre «La economía valenciana en los siglos XIX y XX» y, en *La modernización*, sobre «Exportaciones, demanda interna y crecimiento económico en el País Valenciano».

Este registró en el siglo XVIII un desarrollo extensivo o «expansión estática», cuyos beneficiarios fueron los señores, los grandes propietarios, que, sin ser señores, arrendaban en enfiteusis, y los comerciantes. La presión señorial agravó las tensiones sociales y hubo poco incremento de la demanda de productos agrícolas.

Así y todo, se empezó a producir para el mercado y los cultivadores directos se beneficiaron de la situación. En artesanía, sólo hubo innovaciones en la lana de Alcoy. La seda, como es sabido, acabaría desapareciendo en el siglo XIX.

En la agricultura se advierten dos sectores. Uno moderno, con una demanda exterior, que se tradujo en la expansión de los cultivos de vino, naranja, arroz, almendra y pasa. Se incrementó el abonado de guano y fertilizantes químicos, así como el regadío, lo que, entre otras cosas, permitió el auge vinícola de 1879 a 1899. La naranja pasó de 5.000 hectáreas en 1875 a 65.000 en 1936.

En el período de 1920 a 1930, la demanda de productos agrarios y el alza de salarios condujeron a desequilibrios entre el litoral y el interior y a la transformación de las estructuras. La naranja se benefició de mejoras técnicas y de los motores eléctricos instalados en los pozos, amén de una demanda europea más rígida de lo que se cree y que, con el paréntesis de la Primera Guerra Mundial, se mantuvo incluso durante la Gran Depresión. No obstante, subieron sus precios y hubo de afrontar la competencia de la naranja Jaffa.

El sector agrícola tradicional se caracterizaba por la implantación de la usura, una técnica atrasada, y su dedicación al cultivo de productos básicos. (Todavía en 1922, cerca del 60 por 100 del regadío se dedicaba a cereales.) La crisis finisecular, con el incremento de las importaciones de arroz y de trigo, había ocasionado la ruina de muchos pequeños propietarios, provocando conflictos campesinos, bandolerismo, emigración y el recurso, como en otras partes, al proteccionismo.

La industria se benefició de un efecto inducido, aunque limitado, del desarrollo agrario. Tenía, sin embargo, el inconveniente de un mercado interno no muy grande y la competencia catalana. Entre 1920 y 1930 se consolida la pequeña industria.

En definitiva, el País Valenciano tuvo un desarrollo con altibajos, además de ser una economía dual con un sector agrícola tradicional que suponía un lastre apreciable y sin que los sectores avanzados registraran cambios suficientes en las épocas de auge para prever las modificaciones de la demanda y adecuarse a ellas.

En el trabajo que figura en *La modernización* dice, con razón, Palafox que el caso valenciano muestra que un sector agrícola avanzado impulsado por la demanda exterior puede promover un desarrollo, sin necesidad de la industrialización en que tantas veces se centran los estudios. En el País Valenciano, desde mediados del siglo XIX fue decisivo el tirón de la demanda exterior para varios productos ya citados, y aquello supuso una diferencia fundamental con la evolución económica general de España, aunque, claro está, al igual que en las demás regiones, la economía valenciana se viera afectada por la política económica general.

En los años veinte hubo una sustitución de cultivos, al no dar más de sí las técnicas disponibles; unos sectores industriales (calzado, mueble, cerámica, azulejos...) que se modernizaron y, sobre todo, una distribución de la renta muy desigual que, a diferencia de Cataluña, impidió una demanda sostenida de productos distintos de los agrícolas básicos.

La historia económica del País Valenciano muestra que hasta la Segunda República, en que subieron los salarios, la demanda interior resultó insuficiente y fue sustituida por la demanda exterior. Demanda exterior, sin embargo, que no fue capaz de impulsar a toda la economía y acabar con el sector agrícola tradicional. Aquí, el comercio exterior no fue un *leading sector* o no lo fue suficientemente.

Del lado de la oferta hubo acumulación capitalista, inversiones en un sector agrícola moderno y parcialmente en una industria ligera. En el sector industrial brillaron por su ausencia la construcción naval y las navieras, pese a la pujanza del comercio, así como, hasta hace poco, la industria pesada.

País Vasco

Emiliano Fernández de Pinedo escribe en *Papeles* sobre las «Etapas del crecimiento de la economía vasca (1700-1850)».

El punto de partida fue en el País Vasco la nueva estructura del siglo XVII, durante el cual la siderurgia tradicional declinó, como también el comercio y

la pesca de altura. Hubo una ruralización, con la extensión del maíz y de otros cultivos, disminuyendo la superficie del barbecho, las pomaradas y los pastos. De entonces datan, al parecer, las importaciones vascas de vino riojano.

Con todo, la crisis del Seiscientos no fue tal y, por ello, la recuperación del Siglo de las Luces resultó más bien moderada. Así y todo, la producción siderúrgica se multiplicó por dos entre 1650 y 1750. Mayor consumo nacional de aperos, por el desarrollo extensivo de la agricultura castellana; mayor demanda colonial e internacional, sobre todo británica, y mayores necesidades de la flota fueron las causas de ese incremento. El comercio de lana también se vio impulsado por la reactivación de Castilla.

Especial interés reviste el capítulo de las aduanas, cuya existencia hasta 1841 en el interior —en la raya con Castilla y no en la costa o en la frontera con Francia— reportó ventajas al País Vasco. Incluso, como es sabido, su traslado al litoral y a la frontera provocó la machinada de 1717.

Los límites del crecimiento se pusieron de relieve cuando la agricultura tocó techo hacia 1780, al disminuir los abonos orgánicos, por los menores pastos derivados de la extensión de los cultivos; al incrementarse el precio de la tierra, con la amortización y el amayorazgamiento, y tropezar el desarrollo extensivo con la inexistencia de caminos secundarios en un país tan frágil.

La siderurgia padeció el incremento de los costos del carbón vegetal, debido a la disminución del monte y a la baja de los precios internacionales por las innovaciones tecnológicas. El período de 1720 a 1760 fue el apogeo final y luego vendría un estancamiento y declive, hasta avanzado el siglo XIX.

Durante éste, la desamortización, más comunal que eclesiástica —la Iglesia tenía pocas propiedades en el País Vasco—, y la importante desvinculación aumentaron la oferta de tierras y una demanda de quienes habían acumulado capitales en el comercio o la industria. Con todo, en la primera mitad del siglo XIX se registraron pocos adelantos en la agricultura, hubo una superpoblación relativa que provocó emigración y descontento, que atizó las guerras carlistas, y una extensión del maíz y la patata. Desde 1863, los ferrocarriles permitieron importar grano de Castilla y del valle del Ebro, lo que produjo un declive agrícola, sobre todo en Alava.

Las conclusiones que cabe extraer de este trabajo es que la existencia de unos sectores secundario y terciario desde al menos la Baja Edad Media marcó las posibilidades y también los problemas del País Vasco. La agricultura fue adaptándose mal que bien, pero le era difícil o imposible lograr un genuino desarrollo intensivo. El extensivo tropezaba con las limitaciones propias de un país tan accidentado y la ausencia de caminos suficientes. Se daba una superpoblación relativa en las zonas rurales, que encontraba una salida en la

emigración, fomentada por el sistema de la herencia (testar a la navarra era privilegiar a uno de los herederos).

El desarrollo del maíz y la patata permitió alimentar a la población. En el siglo XVII hubo una ruralización, sin crisis agrícola propiamente dicha, y en el XVIII un moderado crecimiento también extensivo de la agricultura, así como un incremento de la siderurgia, el transporte y el comercio.

La siderurgia tradicional tuvo que afrontar el desarrollo tecnológico europeo y, desde 1841, hubo de dedicarse a la segunda fusión (la hegemonía vasca sólo tendrá lugar, como es sabido, a partir de 1880).

El trabajo de Pedro Fraile, «El País Vasco y el mercado mundial, 1900-1930», en *La modernización*, es casi continuación del anterior, al menos cronológicamente.

Recuerda este autor que el caso vasco, junto con el de Cataluña, resulta conflictivo y polémico, por tratarse del desarrollo de un territorio dentro de un conjunto subdesarrollado. Los aspectos internacionales han sido poco estudiados y sería menester analizar por qué no se desarrolló más la «base exportadora» en el País Vasco, antes de 1930, a diferencia de lo que ocurrió en otros países de la periferia, como Italia y Suecia, donde el comercio exterior, que puede ser perfectamente un *leading sector* (término que conviene traducir, como hace Fraile, por sector dirigente, o también por sector director o conductor, pero no, como hacen algunos, por sector pautador), contribuyó mucho a su desarrollo.

Al País Vasco (y a Cataluña) le perjudicó el aislamiento derivado del proteccionismo y la autarquía, y, según Pedro Fraile, la historia económica del País Vasco invalidaría las tesis de Prebisch de que las relaciones internacionales con una tecnología que cambia perjudica a los países en desarrollo.

El auge de la exportación de hierro antes de 1900 permitió una acumulación de capitales, que se sumó a los fondos repatriados de las Antillas.

Por otra parte, la industrialización siderometalúrgica y en otras esferas fue notable en torno al cambio de siglo, pero ese hecho obliga a estudiar al País Vasco dentro del contexto internacional, por la evolución tan importante que registró precisamente la siderometalurgia en la Europa de esos años y por los cambios que se produjeron en la periferia europea.

Recuerda Fraile que el mercado internacional se caracterizaba porque existía un «centro», constituido por el sur de Gales y el noroeste de Inglaterra, que producían la octava y la sexta parte del carbón y el arrabio mundiales, respectivamente, y controlaban casi la tercera parte de todo el comercio mundial.

Compara Fraile las cifras que exporta ese centro a la periferia, en forma de insumos industriales, fundamentalmente carbón y coque, importando a cambio hierro no fosfórico. Las cifras de Suecia, Italia y España muestran

que ésta se encontraba hasta 1910 en condiciones ventajosas respecto de los otros dos países periféricos.

El que Gran Bretaña, a diferencia de Alemania, y por su menor adelanto tecnológico, no pudiera usar minerales ferrosos de peor calidad condujo a que los precios del hierro vizcaíno se mantuvieran, pero no evitó la desvinculación del País Vasco con los mercados internacionales, cuando el resto de la periferia europea sigue vinculada, hasta el extremo de que en el primer tercio del siglo xx Italia se convirtió en la quinta exportadora mundial de productos industriales y Suecia en la duodécima. En cambio, las exportaciones industriales españolas en general y las vascas en particular nunca llegaron a despegar y, así, entre 1900 y 1930 se mantuvieron más o menos estancadas en torno a los 45 a 50 millones de dólares de 1913. Las cifras hablan por sí solas: en 1926-29, las exportaciones de manufacturas *per capita* en dólares de 1913 fueron de 30 para Suecia, 10 para Italia y 3 para España.

Las conclusiones son que el País Vasco quedó al margen del notable incremento del comercio mundial de manufacturas en los treinta primeros años del siglo xx, a pesar de contar con buenas condiciones. Aquí sí cabría afirmar, tal vez con mayor acento que en Cataluña, que el peso del proteccionismo español ocasionó un contexto desfavorable, que impidió al País Vasco un desarrollo parecido al italiano y al sueco. No sólo el comercio no prosperó, sino que no se benefició demasiado de una tecnología del «centro», de fácil acceso y adopción sencilla.

Como comentario a este trabajo, hay que insistir una vez más en el enorme interés que revisten las comparaciones internacionales. La nueva cara de la historia económica ha desbrozado mucho terreno en el estudio de lo que aconteció en España y en sus nacionalidades y regiones, pero quizá la urgencia de esa tarea y el afán de acopiar datos locales rigurosos han conducido a ignorar muchas veces lo que ocurría en el resto de Europa. Las comparaciones con Inglaterra, o incluso con Francia, no bastan. Tal como hace Fraile, hay que acudir a Suecia, a Italia o a Argelia para encontrar elementos de comparación más útiles. No obstante, el caso tan logrado del desarrollo de la base exportadora sueca e italiana o el caso fallido de la base exportadora vasca no creo que permitan zanjar la inacabable polémica sobre ventajas e inconvenientes del comercio exterior. No hay que olvidar que se trata de tres países con unas condiciones iniciales que no se dan hoy en día en muchos países de la periferia. (Y una última observación de detalle. En historia económica, cuando se habla de Fontana, sin más, se sobreentiende que se trata de Josep Fontana Lázaro, y no de José María Fontana Tarrats, autor este último al que se refiere Fraile en su cita.)

Teoría de la historia económica

En *Papeles*, Pedro Tedde, con «La Historia económica y los economistas», y Patrick O'Brien, con «Las principales corrientes actuales de la historia económica», cambian de tercio al abordar problemas historiográficos, epistemológicos y metodológicos de la historia económica. Cuestiones sin duda polémicas y atractivas, por falta de espacio no voy a entrar a fondo en ellas; sólo opinar que tan interesante apartado hubiera estado más completo si se hubiera dado voz en el capítulo a otros autores que representaran tendencias teóricas diferentes. No faltan, para ello, historiadores de talla, como Vilar y Fontana.

Tedde hace en su trabajo una relación, a mi juicio poco crítica, de los economistas anglosajones que se han ocupado de la historia económica. El trabajo está hecho con rigor y con muchos conocimientos, pero, además de parecer extraído de una memoria de oposiciones, no me parece muy justo dejarse en el tintero a tantos economistas ilustres no anglosajones que también teorizaron sobre la historia económica.

O'Brien dedica su artículo a la Nueva Historia Económica. Partidario de sus métodos —con matices y reservas inteligentes—, el trabajo adolece, en mi opinión, de las ventajas e inconvenientes que reúnen quienes se incluyen en esa escuela. Dedicar bastante espacio a los dos caballos de batalla de la NHE, en los que ésta ha sobresalido más o logrado mejores resultados, a saber, la viabilidad económica de la esclavitud en el sur de los Estados Unidos antes de 1860 y la importancia de los ferrocarriles en el desarrollo económico.

Desde una perspectiva general, no me parece osado afirmar que ninguno de esos temas resulta tan decisivo o apasionante como creen los cliómetras. Resulta curioso, además, que las conclusiones en el caso de la esclavitud vienen a contradecir una de las ideas fundamentales de la NHE, a saber, que el sistema capitalista, gracias a una eficaz asignación de recursos por medio del mercado, ha alcanzado cotas de racionalidad tan elevadas que el destino manifiesto de la humanidad es avanzar por esa vía. Precisamente, la NHE, al demostrar que la esclavitud sureña tenía su racionalidad económica y su justificación desde un análisis coste-beneficio (como también la tenía, sin duda, la esclavitud en la Roma clásica y la ha tenido siempre, a su manera, todo el mundo han sido), ha probado que la racionalidad económica del mercado no conduce, sin más ni más, al bienestar social. Los aportes de la NHE —como los de la Nueva Economía o la Nueva Filosofía, primas hermanas de la primera, aunque sin su rigor científico— son de gran valor metodológico, pero su afirmación de que «el mercado ha funcionado, de verdad, muy bien» me parece que tiene mucho de *wishful thinking*.

La segunda crítica que en este rápido análisis me permito hacer a la NHE, y que se pone de manifiesto, me parece, en el artículo de O'Brien, es esa suerte de corte histórico que encuentran los nuevos historiadores en la primera revolución industrial, donde empezarían a aplicarse, casi por vez primera en la historia de la humanidad, criterios adecuados a la organización económica de la sociedad. Resulta perfectamente admisible, no sólo, claro está, como opinión, sino también como empeño científico, sostener que hoy en día la economía de mercado es la mejor de las existentes. Otra cosa muy distinta, sin embargo, es querer aplicar su teoría, sus logros, sus criterios, con carácter universal. Entusiasmado con sus resultados, nada desdeñables, desde luego, el nuevo historiador de la economía se vuelve miope y, cuando levanta la vista para contemplar el largo periplo humano, algunas imágenes se le confunden y pierde claridad de visión.

Este trabajo de O'Brien sobre la Nueva Historia Económica, las instituciones y el Estado resulta, en mi modesta opinión, algo embarullado a veces y poco concluyente, ya que desde Adam Smith el papel del Estado en la economía, como las bases mismas de la organización social y económica, están abiertos a discusión, sin que la teoría económica ni la historia económica actuales hayan dado la respuesta final a cuestión tan compleja.

Observaciones finales

De las semblanzas que Gonzalo Anes, Simón Segura y Josep Fontana hacen, respectivamente, de los tres grandes maestros de la historia económica, don Ramón Carande, don Luis García de Valdeavellano y don Jaume Vicens Vives, poco puedo contar, salvo recomendar su lectura y también, excuso decir, el ejemplo de tan grandes figuras. Tampoco voy a comentar las opiniones que seis ilustres profesores —Gonzalo Anes, Artola, Fontana, Ruiz Martín, Simón Segura y Tortella— formulan sobre las corrientes actuales de investigación, en respuesta a un cuestionario. Su lectura es obligada y va acompañada de una bibliografía parcial de sus obras.

Sobre las cuestiones de fondo, nada más voy a agregar. En una carta, en la que brillan sus reconocidas cualidades —ingenio, modestia, sabiduría y buen hacer—, dice don Ramón Carande a Fuentes Quintana que al clausurar en Madrid un congreso internacional de historiadores de la economía, cuya fecha no recuerda (fue el Primer Coloquio Internacional de Historia Económica, celebrado en Madrid y Segovia en 1977), se permitió decir, «...acaso con imperinencia... que, ciertamente, extranjeros famosos nos habían enseñado, haciendo bien lo que nosotros hubiéramos debido hacer, y que aquel congreso daba muestras de que habíamos aprendido bien la lección, y estábamos poniendo a

buena altura nuestra labor y que, en lo sucesivo, podrían encontrar entre nosotros colaboradores y competidores». Aunque la afirmación de que no se había hecho lo que se debió hacer no fuera totalmente exacta —la propia labor de don Ramón lo demuestra—, es cierto que la historia económica de la España contemporánea era hasta hace veinte años prácticamente *terra incognita*.

Hoy, esos terrenos, si no están del todo cartografiados o totalmente desbrozados, sí cabe afirmar que se está empezando a conocer de verdad la historia económica de los siglos XIX y XX. Prueba de ello son las tres publicaciones que aquí quedan comentadas. Botón de muestra, puesto que desde su publicación ya ha aparecido alguna otra obra de importancia, auguran un presente fructífero y un futuro brillante para nuestra ciencia. Con humildad y modestia, conociendo las dificultades de la tarea, lo mucho que resta por hacer y la necesidad de hacer avanzar siempre más y más las fronteras de la ciencia, hay sobrado motivo de satisfacción y de esperanza.

APENDICE

Artículos citados, clasificados por materias y en el orden en que figuran reseñados

ABREVIATURAS: *Papeles* = *Papeles de Economía Española*, núm. 20, Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social, de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, Madrid, sin fecha (publicado en 1985).

La modernización = *La modernización económica de España 1830-1930*, compilación de Nicolás Sánchez-Albornoz, Alianza Universidad, Madrid, 1985.

Siglo XX

Jordi NADAL OLLER: «Un siglo de industrialización en España, 1833-1930», *La modernización*.

José Luis GARCÍA DELGADO: «Política económica y defensa de la industria nacional en España, 1898-1922», *Papeles*.

— «Nacionalismo económico e intervención estatal, 1900-1930», *La modernización*.

José GARCÍA LÓPEZ: «El programa económico-financiero de Santiago Alba», *Papeles*.

Francisco COMÍN y Pablo MARTÍN ACEÑA: «La política monetaria y fiscal durante la dictadura y la segunda república», *Papeles*.

Andalucía

Antonio M. BERNAL: «Economía agraria en la Andalucía contemporánea», *Papeles*.

Pedro TEDDE DE LORCA: «Sobre los orígenes históricos del subdesarrollo andaluz: algunas hipótesis», *La modernización*.

Asturias

Rafael ANES: «Límites de la primera industrialización en Asturias», *La modernización*.

Castilla

Angel GARCÍA SANZ y Jesús SANZ FERNÁNDEZ: «Evolución económica de Castilla y León en las épocas Moderna y Contemporánea», *Papeles*.

Nicolás SÁNCHEZ-ALBORNOZ: «Castilla. El neocarcaísmo agrario», *La modernización*.

Cataluña

Jordi MALUQUER DE MOTES: «La historia económica de Cataluña», *Papeles*.

— «La revolución industrial en Cataluña», *La modernización*.

Galicia

Jaime GARCÍA-LOMBARDERO: «La economía de Galicia en los siglos XIX y XX», *Papeles*.

— «Transformaciones de la economía de Galicia en los siglos XIX y XX. Estado de la cuestión», *La modernización*.

Madrid

Concha DE CASTRO: «El comercio de granos y la economía de Madrid en los siglos XVII y XVIII», *Papeles*.

País Valenciano

Jordi PALAFOX: «La economía valenciana en los siglos XIX y XX», *Papeles*.

— «Exportaciones, demanda interna y crecimiento económico en el País Valenciano», *La modernización*.

País Vasco

Emiliano FERNÁNDEZ DE PINEDO: «Etapas del crecimiento de la economía vasca, 1700-1850», *Papeles*.

Pedro FRAILE: «El País Vasco y el mercado mundial, 1900-1930», *La modernización*.

Teoría de la historia económica

Pedro TEDDE: «La historia económica y los economistas», *Papeles*.

Patrick O'BRIEN: «Las principales corrientes actuales de la historia económica», *Papeles*.